

Raúl González Fabre



# Veinticinco años de tomas de posición frente a acontecimientos concretos

A finales de la década de los '60, numerosos cristianos en toda América Latina se lanzaron a la tarea de interpretar los 'signos de los tiempos', animados por el espíritu del Vaticano II. Ello supuso un movimiento de acercamiento a la realidad del Continente de una extensión y profundidad sin parangón en la historia del Cristianismo latinoamericano. El primer momento clave de reflexión sistemática sobre el camino recorrido -la Conferencia de Medellín, en 1968- se constituyó realmente en punto de partida para la tarea de una nueva evangelización del Continente. Multitud de sacerdotes, religiosas y laicos cristianos se aventuraron a buscar qué podía significar esa nueva evangelización, desde el compartir la vida y las luchas del pueblo cristiano pobre. A partir de este acercamiento no sólo fue cobrando sentido y forma una manera de evangelizar muy distinta a lo que había sido usual entre nosotros, sino también una forma novedosa de ser Iglesia: comunitaria, atenta a la realidad para humanizarla, donde el pueblo es sujeto... No se trata únicamente de un espíritu, una manera nueva de ver las cosas, sino que se ha plasmado en la constitución de miles de grupos populares que tratan de vivir el día a día como cristianos en nuestros barrios y campos. Y en sintonía con ellos, obispos, profesionales laicos, instituciones católicas, centros de investigación, sacerdotes y religiosas... se han vinculado a la gestación de esta novedad histórica, aportando y recibiendo de ella.

Pues bien, para estas personas y grupos, la evangelización que Venezuela requiere es proclamación de la Buena Nueva de Jesús en todos los aspectos de la realidad, que ya no tiene rincón profano alguno. En toda ella se juega la vida y la salvación de las personas. Cuando la gente debe ser defendida frente a lo inhumano, es preciso tomar posición como cristianos, en cuanto cristianos precisamente, y no sólo por ciudadanos o bajo alguna otra categoría. Hacerlo públicamente es tarea misma de evangelización. Por eso, la Iglesia comprometida en la Nueva Evangelización ha ido pronuncián-

dose públicamente, y promoviendo acciones consecuentes a lo largo de estos veinticinco años, sobre los más diversos acontecimientos y situaciones concretas.

## PRESENTACION DE LA INVESTIGACION

No es fácil para las comunidades cristianas populares y sus agentes pastorales acceder a los espacios públicos de nuestra sociedad. Los acontecimientos de su vivir no suceden en los grandes escenarios nacionales, definidos por la concentración de poderes o por el acceso a los medios de comunicación. Por el contrario, ocurren donde no hay poder, en lugares que no focalizan la atención de la prensa, la radio o la televisión. No hay presupuestos para publicidad ¡ni para casi nada!, y cuesta un mundo reunir la plata para sacar un pequeño remitido. Por ello es fácil que acontecimientos tan significativos -incluso cuantitativamente- pasen poco menos que desapercibidos ante la 'opinión pública'. Con frecuencia, la vía elegida es el contacto con personas e instituciones que tienen acceso a los medios, directa o indirectamente. No se les pide en

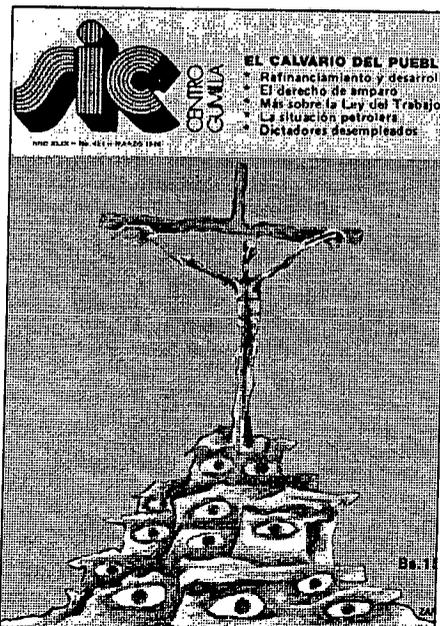
absoluto que se constituyan en 'voz de los que no tienen voz', sino solamente en altavoz de quien posee pensamiento y forma propia de expresión ante la realidad.

El Centro Gumilla ha servido así muchas veces de altavoz para las pronunciamientos de los sujetos eclesiales de la Nueva Evangelización. Las páginas de SIC han recogido desde 1968 más de 60 documentos que podemos clasificar como tomas de posición ante situaciones y acontecimientos concretos, y desde ellas mismas han tomado posiciones públicas en artículos agentes de pastoral y laicos, pertenecientes o no al Centro Gumilla. Desde luego, no se trata más que de una ínfima parte de lo que los sujetos de la Nueva Evangelización han querido comunicar, pero aun así, nos atrevemos a postular que se trata de una parte representativa. Pues bien, en este artículo queremos presentar las conclusiones de nuestra investigación acerca de esas tomas de posición publicadas en SIC.

Al estudiar los documentos disponibles encontramos, como no puede ser menos, cierta correlación entre el momento de la realidad nacional y el pronunciamiento del sujeto. Pero una segunda mirada nos descubre aspectos sobre los mismos que producen el documento. Visto el conjunto de estos veinticinco años, nos atrevemos así a trazar una síntesis evolutiva de lo que viene siendo la relación de los sujetos de la Nueva Evangelización con la realidad social y política en que viven, y que aspiran a transformar en cierta medida. Hemos encontrado cuatro etapas diferenciadas.

### 1a ETAPA: LOS EVANGELIZADORES SE ACERCAN AL PUEBLO. DESPUES DE MEDELLIN (1968-1979)

Al final de la década de los '60, el Concilio Vaticano II ha lanzado a la Iglesia al encuentro con el mundo. Es el tiempo de las revueltas estudiantiles y del inconformismo juvenil. Estas realidades plantean interrogantes a toda la cultura occidental, básicamente en torno al modelo educativo y sus implicaciones ideológicas. Enmarcadas por la crisis universitaria, la toma del templo de Santa Teresa en 1969 y la Asamblea de Jóvenes de Acción en 1970, emplazan a la Iglesia a abrir formas nuevas de relación con los jóvenes. Los jesuitas -en cierta manera, un emblema de la educación católica- responden desde los editoriales de SIC, reconociendo los valores de la revuelta juvenil y proponiendo a la sociedad y a la Iglesia tomar en serio el diálogo con los estudiantes y las propuestas acerca de



una educación liberadora.

Más allá de temas universales, como el de la juventud, Medellín lanza a la Iglesia sobre los problemas específicos del Continente, que ya no abandonará. En la Venezuela de finales de los '60 permanece activa la guerrilla. Algunas instituciones de inspiración cristiana, como la Oficina de Estudios Económicos y Sociales o la Comisión de Justicia y Paz de Venezuela, relacionan abiertamente la subsistencia de la guerrilla con la rigidez social del país que envía a la marginalidad a amplios estratos de la población. En la raíz de la violencia política y delictiva descubren públicamente la miseria.

Este tipo de instituciones se pronuncia acerca de la situación del pueblo, por así decirlo, desde afuera. Citan encíclicas papales (*Populorum Progressio*, *Pacem in Terris*), y se dirigen a quienes tienen poder o al conjunto de la sociedad, pidiendo justicia. Simultáneamente, el reconocimiento de que sólo una Iglesia pobre puede dar testimonio adecuado de Jesús, conduce a religiosos y sacerdotes a insertarse en el medio popular, viviendo en los barrios y, en ocasiones, trabajando manualmente. Se trata de acompañar a la gente en el camino de liberación que ocurre cuando a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. El encuentro es duro. Angós y Castellot, curas obreros, describen la situación vital deshumanizante del obrero caraqueño. Wuytack, sacerdote belga, es expulsado en 1970 por un gobierno socialcristiano, alegando que son políticos sus espectaculares gestos en reclamo de la justicia. A la expulsión responde el pronunciamiento público solidario de casi 100 sacerdotes de la diócesis. El reclamo se dirige contra la misma Iglesia, o directamente contra la Jerarquía. Quienes han dado el paso de compartir la vida del pueblo, interpellan a los demás pidiendo tomas de posición claras respecto a la injusticia; que se ponga por obra lo firmado en Medellín. La pertenencia eclesial se torna dolorosa.

Pronto se deja sentir la voz de algunos obispos. Mons. Ovidio Pérez Morales se dirige anualmente a los trabajadores el 1 de Mayo, alentando la participación organizada en sindicatos y pidiéndoles conciencia crítica para que de verdad resulte constructora de la fraternidad y liberadora de explotaciones. El obispo de Los Teques, Mons. Bernal, junto con el clero de la diócesis, relaciona en 1972 el amor con la justicia, y ésta con la transformación estructural de la sociedad. Apoyándose en el Evangelio y en Medellín, pide que una Iglesia pobre esté del lado de los pobres, y alienta la organización de base. Pero el Episcopado en su conjunto prefiere man-

tenerse silente. La Iglesia ha alcanzado un status de respetabilidad política largamente buscado, y no querrá arriesgarlo entrando en conflicto abierto con el poder. Más bien, los responsables de las relaciones con el Estado actuarán tratando de acallar las voces internas que puedan conducir a ese conflicto. Se proyecta la imagen pública de una Iglesia que es parte del sistema, y lo legítima moralmente.

A mediados de la década de los '70 estalla como tema nacional el problema de la vivienda. Centenares de miles de personas se han trasladado a las grandes ciudades, y comienzan la creación de formas nuevas de vida, desde la nada. La situación es muy precaria. Surgen problemas graves de tenencia de la tierra, acontecen desgracias personales por lluvias y deslizamientos. El Gobierno reacciona pretendiendo desalojar zonas enteras y reubicar a sus habitantes lejos de la ciudad de la que dependen para vivir. Se hacen planes de remodelación de barrios sin contar con la gente, de los que a la postre saldrán beneficiados sobre todo los contratistas. Los religiosos que comparten la vida y la habitación con la gente de los barrios, se encuentran situados en el ojo del huracán. En abril de 1975, comités de defensa de 49 barrios denuncian los desalojos como motivados por los intereses de los privilegiados. Reivindican los barrios como creación de sus habitantes, y se proponen unirse y organizarse, sin imposiciones ni controles. Unos meses después tiene lugar la huelga de hambre en La Vega, en la que participa un sacerdote jesuita que es detenido 'para salvar su vida'. En el conflicto público con el gobernador Diego Arria, el Consejo Presbiteral de Caracas reafirma que la misión de los agentes de pastoral en los barrios les es conferida por la Iglesia, e incluye como parte esencial la lucha por la justicia desde la opción por los pobres. Un año después, cuando el P. Driscoll sea detenido en Nueva Tacagua, los sacerdotes del arciprestazgo de Propatria y Mons. Alfredo Rodríguez notarán la injusticia de tantas situaciones inhumanas en un país petrolero, y reiterarán los derechos de la gente a la vida digna, la vivienda y la manifestación.

La voz de Mons. Parra León se eleva repetidamente en favor del pueblo. A raíz de su detención en Riobamba (Ecuador) cuando participaba en una reunión eclesial, denunciará la situación insostenible de los pobres y la complicidad de ciertos sectores eclesiales. Los asesinatos políticos, como el de Jorge Rodríguez y el de Fernando Quintero son condenados también por algún obispo y por el clero. La

relación con el Estado, uno de los puntos permanentemente problemáticos para la Iglesia venezolana, se enturbia por estos pronunciamientos que involucran denuncias contra la acción gubernamental. Mons. Parra León se niega a asistir a un acto simbólico de reconciliación propiciado por el presidente C.A. Pérez en 1978: la condecoración de la Virgen de Coromoto. Años antes, en 1975, los sacerdotes y religiosas de Paria habían pedido a diversos grupos de poder locales que abandonaran la construcción de un magnífico templo, que ellos sentían como manipulación, mientras no se diera culto a Dios con una vida digna para los habitantes de Paria. Todo un símbolo. Inevitablemente, unos y otros dentro de las estructuras eclesiales deberán irse definiendo, ante el conflicto que provocan unos cristianos decididos a asumir públicamente como tales toda la realidad.

Contra la idea que se ha querido difundir, los pronunciamientos sobre la realidad en esta primera etapa no se caracterizan por una abundancia particular de categorías tomadas de la Sociología o la Teoría Política marxistas. Más resuenan principios personalistas -la dignidad inviolable de cada persona, sin importar su status social- y llamados a una justicia particular que podríamos llamar reivindicacionista, y que consiste en que todos tengan acceso a lo que es de todos: la renta petrolera y la tierra, básicamente. A nivel teológico, se alude con frecuencia a la necesidad de recuperar la autenticidad del mensaje evangélico en la praxis eclesial: una Iglesia pobre del lado de los pobres, que vincule expresamente la fe a la justicia, capaz de diálogo y de entrar en los conflictos concretos de la realidad. Sobre estos, es cierto que los análisis no se hacen ya desde afuera apelando a valores intemporales, sino desde el compromiso con una de las partes. Y lo que se alcanza a descubrir en el análisis trasciende el pecado o la mala voluntad de alguien, para alcanzar a hacer diagnósticos de las estructuras sociales.

Sin embargo, las propuestas nunca incluyen la destrucción de la otra parte. Indudablemente, no se trata de la lucha de clases, en sentido marxista. Tampoco ocurre la "islamización" de las propias posturas. No se pretende que nos hallemos en cada caso ante el conflicto entre los creyentes y los enemigos de Dios con quien no se dialoga sino a los que directamente se vence; por el contrario, lo que se solicita de la otra parte contendiente es entrar en razón. Eso sí, sin caer en la ingenuidad de pensar que el diálogo tendrá lugar simplemente a partir de llamados a la buena voluntad y a la renuncia a

los propios intereses ilegítimos. Se presiona para dialogar, para que el otro reconozca que hay otros intereses en conflicto, que deben ser atendidos. Estos rasgos se mantendrán en adelante caracterizando a las tomas de posición de los grupos comprometidos con la Nueva Evangelización.

## 2a ETAPA: EL PUEBLO SE HACE EVANGELIZADOR. DESPUES DE PUEBLA (1979-1983)

Habíamos encontrado en la primera etapa de nuestra exploración que preponderan ampliamente las voces de 'gentes de Iglesia' que se acercan a los pobres de diversas maneras. Desde el choque con la realidad, se dirigen a instancias de poder exigiendo respeto para los derechos elementales, a otras personas de la Iglesia pidiendo mayor compromiso y coherencia, y al pueblo proponiendo organización para presionar y enfrentar las dificultades concretas. Hacia el final de la década este acercamiento, hecho trabajo paciente en los ambientes populares, empieza a dar sus frutos.

El proceso previo a la Conferencia de Puebla (1979) muestra la existencia de un amplio número de grupos eclesiales populares maduros, que pueden pronunciarse con una voz comunitaria propia, sin necesidad de delegar en el padre o en la hermana. Hablarán en 1979 los grupos cristianos de base proponiendo cuestiones para analizar el resultado de la Conferencia. De ahí en adelante, SIC recoge un número creciente de tomas de posición firmadas ya por colectivos populares: los obreros cristianos escriben a su obispo sobre la discusión del contrato colectivo de SIDOR; el Congreso de la JOC en 1983 analiza la situación de los jóvenes trabajadores con profundas consideraciones estructurales; las comunidades de base de Ciudad Guayana hacen público el 1 de Mayo de 1983 que sólo quieren celebrar el latir del pueblo en medio de la dureza de la situación laboral; y en noviembre del mismo año, los ex-alumnos de la escuela de Los Eucaliptos afirman ante el Ministro de Educación la capacidad de la comunidad organizada para llevar adelante la escuela que ellos mismos han construido con las hermanas, una vez que éstas se retiran.

En 1979, la revolución sandinista se había hecho cargo del gobierno en Nicaragua, con la participación de importantes sectores eclesiales. Es una oportunidad de construir algo distinto, que la agresión norteamericana pronto empezará a frustrar. Ya antes, a raíz de la denuncia del tratado comercial con Estados Unidos

(1972), y más tarde con las nacionalizaciones (1975), habían manifestado algunos sectores eclesiales su satisfacción por el avance hacia de la ruptura de la dependencia respecto a USA. Sobre todo desde la huelga de hambre del P. D'Escoto, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, muchos cristianos se sienten implicados con la suerte de la nación centroamericana. Se realizan actos públicos de solidaridad de los cristianos, e instituciones como Fundalatin asumen la causa como propia. El tono ha variado del de diez años atrás. Ya no se trata principalmente de la soberanía como valor abstracto, sino de una solidaridad con las esperanzas bien concretas de nicaraguenses y salvadoreños. La figura de Mons. Romero se convierte, para muchos venezolanos, en emblema de esa esperanza pascual.

En esta etapa, mientras las voces de obispos individuales se atenúan un tanto -salvo el siempre combativo Mons. Parra León, que en 1982 recuerda el compromiso de la Iglesia con el pueblo, con ocasión del conflicto por la ocupación de apartamentos del INAVI en Cumaná- aparecen las congregaciones religiosas agrupadas, como sujeto colectivo de pronunciamientos. En 1981 varias de ellas salen, junto con otros grupos e instituciones, en defensa de la etnia kariña suprimida legalmente. Ya antes, otros religiosos, misioneros que aprendieron a valorar las culturas indígenas, se habían pronunciado por la elaboración de una nueva Ley de Misiones que suprimiera el bochornoso tutelaje civil que sobre los indios se otorgaba a los misioneros (J.F. Nothomb, 1971), y por la plena consideración de los indígenas como adultos con voz propia (A. Villamañán, 1977). Inicialmente, se trata de evitar que se presente el Evangelio como una religión de blancos. Pero a la altura de los '80, el objetivo será la defensa de la tierra y los derechos indios frente a abusos concretos de quienes pretenden despojarlos con apoyo legal o armado del Estado (casos Zingg-piaroas, 1984; CVG-yekuana, 1989).

Al final del primer gobierno de CAP, es ya evidente el deterioro de la democracia. En sus mensajes anuales de Año Nuevo y Cuaresma, la Conferencia Episcopal se pronuncia repetidamente denunciando la corrupción, la insolidaridad y la injusticia en la sociedad venezolana, que destruyen las oportunidades de tantos venezolanos. Los sujetos de la Nueva Evangelización no piden sencillamente una porción más grande de la torta petrolera; la palabra clave es 'participación'. Que con la riqueza petrolera se edifique una economía donde todos puedan parti-

cipar como productores. Que el sistema político pase de una democracia representativa a una participativa. Las comunidades cristianas populares se sienten sujeto, y por eso rechazan profundamente el populismo que los reduce a la condición de clientes. Los obispos reconocen que no se trata de una situación sana, y piden repetidamente la rectificación que no se dará. El país se encamina irremisiblemente a la crisis más anunciada de su historia.

En el discurso, los derechos abstractos del hombre han sido desplazados por la conciencia de una dignidad ganada en la construcción de nuevas realidades de vida donde parecía que nada podía florecer. La dignidad de los pobres no es un postulado de principio, sino algo que hemos experimentado en nosotros mismos, en una vivencia de lucha comunitaria que ya dura años. Se cita cada vez más la Biblia, en torno a los profetas y a una categoría de Pueblo de Dios muy vinculada al Exodo: el Pueblo que camina hacia la vida rompiendo las cadenas, liberándose. Más que una opción intelectual, es la participación en la vida de este pueblo y el sumar el brazo a la tarea de la liberación lo que confiere la autoridad para pronunciarse sobre la realidad desde Dios. La autenticidad no se mide en un gesto, sino en un camino vital. La presencia de Jesús en medio de la gente se vuelve experiencia pascual: El camina con su pueblo, muere en las restricciones a la vida de los pobres, resucita en cada pequeño avance organizativo, en cada paso en que los individuos se vinculan organizativamente a los demás. El objetivo final está claro: la construcción de una sociedad fraterna; que el Reinado de Dios se acerque a Venezuela.

## 3a ETAPA: ENFRENTAR LA CRISIS: DESPUES DEL VIERNES NEGRO (1983-1992)

La crisis pone de manifiesto la brecha profunda que subyace a la sociedad venezolana. Ahora que no hay para todos según el viejo esquema, unos se enriquecerán mientras las mayorías no sólo verán empeorar sus ya precarias oportunidades, sino que serán sistemáticamente reprimidas si no aceptan mansamente las nuevas condiciones. La democracia se cierra. Las comunidades cristianas y los agentes de pastoral que las acompañan se pronuncian públicamente con ocasión de cada suceso concreto: asesinatos policiales, retroceso de los servicios públicos... agua, salud, transporte, represión contra el derecho a la huelga (caso Hevensa, 1985), desalojos (San Blas,

1985), calamidades (San Isidro, 1985)... Los grupos cristianos, que no habían sido receptores pasivos de los dones petroleros, sino creadores de cultura y vida, de ninguna aceptarán pasivamente un despojo del que no son culpables, y que no merecen. Otros se apropiaron de la renta y la deuda, no ellos. La Conferencia Episcopal acompaña este sentir con dos importantes documentos, que le causarán problemas con el gobierno Lusinchi: sobre el desempleo (Cuaresma 1986) y sobre el problema de la vivienda (1987). En ellos no sólo se reconoce la realidad como contraria al proyecto de Dios, sino que se ahonda en sus raíces estructurales, se señalan responsables y se indican caminos de salida.

El documento episcopal sobre la vivienda denuncia los esfuerzos de los partidos políticos por controlar las organizaciones vecinales independientes. En el campo mismo de esa batalla se encuentran las organizaciones populares cristianas (Bella Vista, San Félix, 1985), que se pronuncian repetidamente contra lo que no es más que un intento de acallar la voz de quienes pagan en propia carne el precio de la piñata que no disfrutaron. Los treinta años de democracia sirven para hacer balance en ambiente de frustración (CEV, 1988). Se reconocen los logros, pero es fácil ver que la participación política y económica se está cerrando. Todavía sería posible crecer en democracia (religiosos de La Vega, 1988), se piensa. Al final de ese año, la masacre de El Amparo y las mentiras que la siguen desengañarán a los más optimistas entre los cristianos. La violencia ha llegado para quedarse.

En un brillante mensaje a los jóvenes (1985), la Conferencia Episcopal les había convocado a la tarea de la Nueva Evangelización, pidiéndoles participar en comunidades cristianas, y comprometerse con la transformación social desde la identificación con los pobres. Pocos años después, el país se ha convertido en un coladero para el narcotráfico. La muerte se extiende por los barrios, que son ya tierra extraña a la acción policial del Estado. Los grupos cristianos de barrio se preguntan si se trata de impotencia o de complicidad (anónimo, 1989). La redada masiva se convierte en el gesto habitual de unos organismos de seguridad incapaces, como señala el cardenal Lebrún en 1991. No hay respuesta a su llamado a una acción preventiva decidida y eficaz que ataque las causas estructurales de la violencia.

El valor central que los cristianos proclamarán públicamente en sus tomas de posición es la vida, amenazada ahora de mil maneras. La Iglesia asume institucio-

nalmente la defensa de los supervivientes de El Amparo (Mons. Ubaldo Santana, 1989; Matías Camuñas, 1990, etc) en signo premonitorio de un rol que deberá desempeñar en adelante a menudo. Surgen nuevos sujetos evangelizadores: los grupos de Derechos Humanos de inspiración cristiana —PROVEA, Red de Apoyo—; las vicarías episcopales de Derechos Humanos —Caracas, Cumaná—; y los colectivos 'Justicia y Paz' —Secretariado de Religiosos SECORVE, Petare—. Con la participación de estudiantes y profesionales cristianos, estos grupos e instituciones no se limitan a los casos de abusos contra individuos, sino que asumen una concepción integral de los Derechos Humanos (PROVEA, 1990; SECORVE, 1991). Por primera vez en la historia eclesial venezolana, harán del seguimiento judicial de los casos y de la proyección pública el núcleo de su acción.

El discurso en esta etapa se simplifica. Los principios están claros, el lugar desde el que se habla y la autoridad que avalan la toma de posición no dejan lugar a duda si se trata de grupos eclesiales, del clero o de los obispos. No es preciso justificarlo todo cada vez. Lo que en esta etapa será imprescindible es resaltar las consecuencias de las situaciones y acontecimientos. Los cristianos se esfuerzan por conectar a los dirigentes y al país con su realidad, en hacer notar que cada atropello, cada programa gubernamental insensato o injusto, cada acto de violencia impune o consentido acercan a la sociedad venezolana a un conflicto generalizado. No habrá paz sin justicia. Los hechos confirman el pronóstico: cada vez menos paz, menos posibilidades de entendimiento, más ira. El Reinado de Dios no se acerca sino que se aleja del conjunto de nuestra sociedad.

El estallido social de Febrero de 1989 mostró hasta qué punto en nuestra Iglesia ha calado el talante de la Nueva Evangelización. La detención de los jesuitas de La Vega, los pronunciamientos del Consejo Presbiteral de Caracas, de diversos obispos y de la CEV, la defensa consecuente de las víctimas de la represión (FEDEFAM, COFAVIC), y sobre todo el acompañamiento en el día a día de la vida de la gente, convierten a la Iglesia en noticia e incrementan su credibilidad institucional, cuando la de otras instituciones se derrumba (SIC 1992 pp. 53-54).

Se llama a los demás a abandonar los intereses particulares y ocuparse del rumbo del conjunto del país, amenazado en cada hecho concreto. Desde la jerarquía de la Iglesia se empieza a dar el ejemplo. Mucho tiempo ha pasado desde que algunos obispos sentían tarea suya acallar los pronunciamientos "imprudentes" de cier-

tos agentes de pastoral, para evitar conflictos con el poder. Ahora se relegan viejos antagonismos entre diversos sectores eclesiales, porque es el momento de sumar fuerzas a favor de los más indefensos. Determinados obispos se manifiestan públicamente con inusitado vigor. Ya no se trata de casos aislados, "cabezas calientes" faltas de representatividad. Por el contrario, quienes adoptan sonadas posturas públicas saben que con ellos está el Colegio Episcopal Venezolano como cuerpo. El giro se hace patente a la opinión pública cuando Mons. Lebrún sale en defensa abierta de los sacerdotes del Grupo Petare ante las descalificaciones del inefable Ciliberto (1987). Y alcanzará su más clara expresión cuando el mismo arzobispo de Caracas, acompañado de sus obispos auxiliares, peregrine a las fosas comunes de La Peste (1991), para acompañar dolores, reconocer la Pasión de Jesús en nuestro pueblo, y reclamar la luz de la verdad frente a la mentira oficial. Sin duda, la Iglesia ha sabido cambiar de lugar frente a la realidad, y puesto que lo ha hecho públicamente, la gente lo nota.

Los acontecimientos de los meses posteriores al intento de golpe de Estado de Febrero 1992, han mostrado que los venezolanos desean más y no menos democracia. Esto es, una democracia distinta, que no puede ser fraguada más que a través de cambios radicales. Comunidades cristianas y agentes de pastoral, desde el más humilde catequista hasta la Conferencia Episcopal, han tenido ocasión de escuchar este clamor y hacerse portavoces de él, tomando en algunos casos posiciones claras (SIC 1992 pp. 93-96). A diferencia de situaciones precedentes, en que era difícil ganarse el espacio comunicativo para pronunciamientos acerca de la realidad, la sociedad venezolana reclama ahora la palabra de los sujetos de la Nueva Evangelización, que le han asegurado repetidamente que nuestra realidad, por dramática que sea, puede ser transformada en lugar de fraternidad y vida para todos. En este momento, y en los que habrán de venir, no podremos permanecer callados. Quienes nos creyeron y depositaron en los cristianos una esperanza, se sentirían defraudados. Más aún, no bastará un discurso moralizante o utópico. La Iglesia venezolana, en todas sus instancias, deberá tomar posición clara a favor de caminos viables de futuro, con palabras y con hechos: arrimar el hombro a la creación de algo nuevo. Ninguna noticia mejor podremos ofrecer a nuestro pueblo que revivir así a Jesús, para él. Auténtica Nueva Evangelización.